

Catástrofe en Doñana

El desastre de Doñana pone dramáticamente en evidencia toda una cadena de negligencias y conductas irresponsables. En este caso, nadie, ni la empresa ni las administraciones, pueden excusarse tras la eximente de ignorancia, pues desde hace años existían –y se conocían– estudios e informes que alertaban sobre el peligro.

De los simples datos publicados en los primeros días posteriores a la ruptura de la presa en los medios de comunicación, se puede hacer un breve balance de las alertas anteriores a los hechos. En 1995 un ingeniero de la propia empresa Boliden Apirsa había advertido de los riesgos a las varias administraciones involucradas. En 1996 los jueces que examinaron las denuncias de la Confederación Ecopacifista Andaluza (CEPA) archivaron el caso. La Junta de Andalucía ha ignorado durante años múltiples denuncias de organizaciones ecologistas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del gobierno central, conocía las denuncias de la CEPA de varias fugas sistemáticas de alta toxicidad, entre ellas otra rotura en 1996, menos importante que la actual, de la misma presa, con vertido masivo de contaminantes; pero había hecho caso omiso de ellas. A finales del mismo año, la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía habían estudiado la situación de la presa y habían archivado el caso en agosto de 1997. La UE no vaciló, incluso, en conceder una ayuda de 5.000 millones de pesetas a la explotación. Finalmente, como es sabido, la presa que se ha roto había sido

Los ecologistas denuncian, pero no se les escucha, sino que se les descalifica como exagerados, agoreros y hasta enemigos del progreso

Este artículo apareció como editorial en el número 72 de la revista *Mientras tanto*.

Las empresas procuran minimizar sus costes traspasando como externalidades los costes ecológicos a los ecosistemas y a la sociedad

objeto de una inspección sólo unos días antes del accidente.

Es una historia que se repite una y otra vez, aunque sólo salta a la actualidad cuando el daño es espectacular, como en este caso. Los ecologistas denuncian, pero no se les escucha, sino que se les descalifica como exagerados, agoreros y hasta enemigos del progreso. Las empresas procuran minimizar sus costes traspasando como externalidades los costes ecológicos a los ecosistemas y a la sociedad. De ahí su tendencia irresistible a no poner los medios de prevención suficientes. Las administraciones públicas o bien aceptan los argumentos de las empresas para no contrariarlas y ahuyentar sus sacrosantas inversiones, o minimizan los riesgos, o ambas cosas a la vez. Hay una razón muy simple: no creen *de verdad* en la gravedad real de estos riesgos ni razonan en términos de la más elemental precaución pertinente para tales casos. El resultado final está cantado: prevalece la minimización de los peligros potenciales y no se toman las medidas adecuadas, de modo que las probabilidades de catástrofe aumentan en consecuencia.

Los ecologistas se ven sometidos a ataques de los portavoces de las empresas y las administraciones. La CEPA en particular ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte de la Junta de Andalucía y otras administraciones, en especial desde que encabezó la lucha contra el proyecto de vertedero de residuos tóxicos en Nerva, dentro del complejo minero de Riotinto. También en los primeros momentos tras el desastre de Doñana, la

preocupación esencial parecía ser la de deslegitimar el ecologismo. Los ecologistas aparecieron no como unos aliados –particularmente motivados y voluntariosos– para evaluar los daños y luchar contra ellos, sino como unos enemigos que debían ser acallados. La lógica era impecable: importaba ante todo *tranquilizar a la opinión pública* y fingir que no pasaba nada demasiado grave. Las voces medioambientalistas y su difusión entre la población se perciben como un molesto prejuicio, una superstición que obstaculiza el avance fluido del progreso técnico y de las inversiones, y hasta una actitud cobarde y pusilánime. ¿Acaso no ha entrañado siempre riesgos la innovación? ¿Se puede hacer algo grande sin incurrir en peligros? Sin embargo, el desastre de Doñana pone en evidencia que el papel real de los ecologistas es el contrario: *prevenir* mayores catástrofes actuando como ‘internalizadores’ de esos mismos costes que las empresas externalizan sobre el medio ambiente.

La prepotencia tecnológica desemboca en la inconsciencia. La declaración de la ministra Isabel Tocino, a los dos días del accidente, según la cual “Doñana se ha salvado”, no sólo era una exclamación para acallar el temor de la población. Era también una declaración de inconsciencia e ignorancia, peligrosa y culpable en una alta responsable en la materia. Es grave para la ministra del ramo ignorar que los fangos depositan sus materias disueltas y en suspensión en los suelos, al alcance de las raíces de las plantas, y que penetran fácilmente en los acuíferos; que ríos, marismas, acuíferos y masas

vegetales forman un complejo sistema hidrico con múltiples interconexiones y delicados equilibrios. Este sistema no reconoce las fronteras administrativas entre el perímetro del Parque Nacional –que depende del Ministerio– y el Parque Natural colindante, que depende de la Junta de Andalucía. El río por donde han bajado los lodos transcurre entre los dos. Cuando Isabel Tocino declaraba que Doñana estaba a salvo quería decir en realidad que los lodos no habían entrado en ‘su’ Parque Nacional. No sólo era imposible creer que el ecosistema de Doñana estaba salvado –era del todo inverosímil–, sino que se podían conjeturar graves daños para muchos años en los campos cubiertos de lodo, en las riberas de los ríos, en las marismas, en la flora y la fauna (a través de las cadenas tróficas) y en las aguas del río y el mar, y por tanto en sus peces y animales marinos. De todo ello, tal vez lo más grave, a largo plazo, sea la contaminación de los acuíferos, porque las aguas puras subterráneas carecen de la luz solar y los microorganismos que podrían contribuir a regenerarlas de manera natural y su circulación y renovación es muy lenta.

Los agricultores y pescadores afectados están ya experimentando en sus propios bolsillos que una catástrofe ecológica es también una catástrofe económica, aunque a veces no nos damos cuenta porque *otros* pagan los platos rotos. Es más, debido a la magnitud de los mercados actuales, también se van a resentir los agricultores y pescadores andaluces no directamente afectados, porque todo producto del agro y el mar proce-

dente de Andalucía va a ser sospechoso. Ojalá esta catástrofe sirva, por lo menos, para hacer progresar entre las gentes una noción de la riqueza más adecuada a la realidad, una noción que contemple como riqueza ante todo el patrimonio natural y su capacidad para autorreproducirse y brindarnos a los seres humanos sus benditos frutos. Que al menos *aprendamos escarmentando* y no echemos la lección en saco roto.

Otra lección económica es que los metales y los productos químicos que usamos son mucho más caros de lo que pagamos, simplemente porque no pagamos todos los costes implicados. Los 18.000 millones de pesetas iniciales estimados por la Junta de Andalucía como monto de las indemnizaciones que debe pagar la empresa, representan una evaluación provisional, probablemente muy insuficiente, de un coste invisible que debería gravitar sobre el precio de venta de los productos de la empresa minera. Hay, pues, otra responsabilidad que nos atañe a todos, la de consumir objetos que requieren metales y productos químicos cuya producción genera unos residuos peligrosos y de gestión difícil y cara. Es el propio modelo técnico e industrial lo que la catástrofe de Doñana pone también en cuestión. Piénsese que la minería mueve anualmente en el mundo –sin contar los minerales energéticos– unos 30.000 millones de toneladas de materiales (entre minerales y sobrecarga), es decir, una cantidad que equivale a casi el doble de los sedimentos arrastrados cada año por todos los ríos del mundo. La especie humana se ha convertido en un agente geoló-

Los agricultores y pescadores afectados están experimentando en sus propios bolsillos que una catástrofe ecológica es también una catástrofe económica

gico impresionante. Y todas estas tierras movidas tienen efectos deletéreos en los ecosistemas vecinos: ríos, fuentes, acuíferos contaminados, bosques talados, tierras envenenadas –con sus correspondientes perjuicios humanos–. El caso de Doñana ilustra eficazmente lo que está pasando en muchos lugares del mundo.

La producción limpia requiere un nuevo diseño basado en el principio de la minimización de los impactos, la parsimonia en el uso de recursos y el reciclado de todos los materiales que sea posible aprovechar. Mientras tanto, hay que exigir a los fabricantes y a los poderes públicos otra actitud completamente distinta de la que muestran: responsabilidad ante los riesgos y reconocimiento de la necesidad de prevenir antes que curar. Es alarmante que ante lo que ha ocurrido en Doñana y alrededores ningún responsable político haya dimitido o haya sido destituido. ¿Cómo confiar en la eficacia de unas labores de ‘limpieza’ de los lodos esparcidos y ‘restauración’ de las zonas afectadas, si la responsabilidad va a seguir en manos de los mismos cargos públicos que han dado muestras sobradas de irresponsabilidad ambiental? Es imposible quitar todo el fango tóxico y evitar que por lo menos una parte de su carga se disemine en el medio. Pero por lo visto es aún más difícil eliminar los lodos de nuestra vida política, donde parece haberse asentado el principio de que aquí, de entrada, no dimite nadie. Habrá que vigilar también para observar qué cantidades acaba pagando la empresa Boliden en concepto de indemnizaciones.

Mientras a unos no ‘se les caiga el pelo’ y otros puedan salir del paso pagando unas indemnizaciones más o menos cubiertas por sus seguros –es decir, sin real quebranto económico que los haga recapacitar–, los avances efectivos hacia una producción limpia quedarán en agua de borrajas.

Es aún más difícil eliminar los lodos de nuestra vida política, donde parece haberse asentado el principio de que aquí, de entrada, no dimite nadie